

13.^a REUNION - 10.^a SESION ORDINARIA - JUNIO 9 DE 1866

Presidencia del señor URIBURU

Senadores presentes: Alsina, Bazán, Blanco, Bustamante, Correa, Daraet, Dávila, Del Barco, Elías, Frías (F.), Frías (U.), Granel, Llerena, Madariaga, Navarro, Piñero, Rojo (T.), Román, Uriburu y Victoriae.

Senadores ausentes, con aviso: Borges y Ferré

Senadores ausentes, con licencia: Bárcena y Rojo (A.).

SUMARIO

1.—Comunicación de asuntos entrados.

2.—Consideración del dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre los proyectos devueltos modificados por la Cámara de Diputados, relativos a la convocación de una convención y a la forma y tiempo de la elección de sus miembros, y sobre otro que reduce el tiempo para la publicación del registro cívico, y para hacer el escrutinio de las actas electorales para la elección de los Convencionales.

—En Buenos Aires, a los nueve días del mes de Junio de mil ochocientos sesenta y seis, reunidos en su sala de sesiones los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores Borges y Ferré, con aviso, y ausentes de esta capital los señores Bárcena y Rojo (A.), con licencia.

1

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior de 7 de Junio (9.^a ordinaria) se pasó a dar cuenta de los asuntos entrados, que eran:

1º — Un acuse de recibo del señor vicepresidente de la Nación de la nota en que se le comunicó que el Congreso no le había aceptado la renuncia que presentó.

Sr. Alsina. — Sería bueno comunicar esta nota a la otra Cámara, puesto que ha sido el Congreso quien ha tomado la resolución a que la nota se refiere.

Sr. Presidente. — Efectivamente, la nota viene dirigida al presidente del Congreso, no al Senado, y parece que debe comunicarse a la otra Cámara.

Sr. Alsina. — Es preciso que se comunique.

Sr. Presidente. — Así se hará.

2º — Un despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales, adjuntando un proyecto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo para denunciar el tratado de 9 de Agosto de 1852 con Portugal. Se destinó a la orden del día.

2

Se pasó a la orden del día con la consideración del siguiente despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales.

Honorable Senado:

La Comisión de Negocios Constitucionales ha tomado en consideración los proyectos que la Honorable Cámara de Diputados ha remitido a nueva revisión del Honorable Senado: uno sobre la necesidad de la reforma de la Constitución en el artículo 4º y en el inciso 1º del artículo 67, en la parte que limitan la facultad del Congreso para imponer derechos de exportación, y otro sobre la forma y tiempo de la elección de los miembros de la Convención

que ha de reunirse con ese objeto, así como la compensación de que han de gozar.

También ha examinado otro proyecto que la misma Cámara de Diputados envía en revisión, referente al último proyecto, y por el cual se reduce a ocho días el término para la publicación del registro cívico en las elecciones de diputados a dicha Convención, y se prescribe que el escrutinio de ellas se haga a los quince días después.

La Honorable Cámara de Diputados ha hecho en el primer proyecto una adición, aceptada la cual se declararía la necesidad de la reforma de la Constitución, no sólo en la parte expresada, sino también «en la manera de imponer las demás contribuciones».

La Comisión ha discutido este punto con la detención que requiere su importancia, y la mayoría de ella, no encontrando conveniente la adición que se propone por la otra Cámara, en virtud de las razones que expone en el debate, tiene el honor de aconsejar a la Honorable Cámara que la deseché, insistiendo en su anterior sanción.

En el segundo proyecto, la Honorable Cámara de Diputados ha hecho también enmiendas que eran necesarias, desde que la Convención no se reunió el año anterior, como establecía el proyecto del Senado; su simple lectura basta para conocer la conveniencia de su adopción; y así propone lo haga vuestra honorabilidad, la mayoría de la Comisión, pidiendo sólo que en el artículo 6º se supriman las últimas palabras que dicen: «cuya publicación se limita al término de quince días», y que entren como artículo 7º y 8º, los dos que forman el tercer proyecto de que se ha hecho mención, pues así es indispensable para que la reunión de la Convención se verifique el 1º de Septiembre próximo, como expresa el artículo 3º.

Sala de comisiones, Buenos Aires, Junio 7 de 1866.

Abel Bazán. — Uladislao Frías.

Al Honorable Senado de la Nación:

La Comisión de Negocios Constitucionales ha examinado el proyecto de ley, sancionado por la Cámara de Diputados, convocando una convención para la reforma de la Constitución nacional en el artículo 4º y en el inciso 1º del 67, en cuanto limitan la facultad de imponer derechos de exportación y en la manera de imponer las demás contribuciones.

La primera de las reformas que el proyecto

quiere someter a la decisión del pueblo, fue ya estudiada y sancionada por el Senado en las sesiones ordinarias del año anterior. De entonces acá la conveniencia de la reforma, puesta en evidencia por los sucesos mismos, cuya previsión la aconsejó, ha tomado el carácter de una verdadera necesidad para la vida económica del gobierno, para la paz y honor de la Nación.

El segundo punto cuya modificación se propone, aunque es de esperarse que jamás tenga aplicación, convendría, sin embargo, establecerlo según la mente conocida de la Cámara de Diputados, que sin duda alguna, dista mucho de tener la extensión a que se prestan los términos empleados para expresarla.

Aquella Cámara ha querido que la población dejase de ser la base aparentemente proporcional de las contribuciones a que el artículo 4º la refiere; y será de temer que por los términos del proyecto, la Convención entendiera que sus facultades le permitían cambiar también el modo y las condiciones que para las contribuciones directas exige el inciso 2º del artículo 67.

Al tratar de precisar en esta parte los términos del proyecto, para que la idea de la Cámara de Diputados quede completamente clara y terminante, surge una cuestión que requiere previa resolución.

Si el proyecto ha de reputarse en tramitación no interrumpida desde el año anterior, si la sanción que obtuvo del Senado no caducó por el receso, es indudable que esta Cámara no puede hoy innovar legítimamente en el proyecto; y que sus facultades se circunscriben a rechazar o aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara revisora.

Esta manera de juzgar el estado del proyecto en su tramitación, no dice con la genuina inteligencia de la disposición constitucional que la establece, y va directamente contra el principio fundamental que da vida al sistema representativo.

La Cámara de Senadores debe considerar, pues, el proyecto de reforma como iniciado constitucionalmente por la de Diputados y deliberar en la materia con la amplísima libertad que a la Cámara revisora corresponde.

Así no sólo podría consultar con igual libertad la conveniencia de las reformas propuestas, sino que resolvería también ipso facto aquella cuestión previa que surge de una práctica fundada en doctrinas insostenibles.

Con este propósito, debería adoptarse el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Convócase una Convención nacional con el objeto de reformar la Constitución en el artículo 4º y en el inciso 1º del artículo 67 en la parte que limitan la facultad de imponer derechos de exportación, y en cuanto se designa la población como base proporcional para las demás contribuciones.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

Sala de comisiones, Junio 4 de 1866.

Tadeo Rojo.

Al Honorable Senado de la Nación:

Dos proyectos de ley ha sancionado la Cámara de Diputados para reglamentar la convocatoria de la Convención llamada a resolver sobre la reforma de la Constitución nacional en el artículo 4º y en el inciso 1º del 67, en cuanto limitan la facultad de imponer derechos de exportación, y en cuanto designa la población como base proporcional para las demás contribuciones.

Al confeccionar uno de los proyectos, aquella Cámara descuidó abreviar proporcionalmente todos los trámites electorales que se necesitaba correr, a fin de que la Convención estuviera instalada el 1º del próximo Septiembre.

De ahí la necesidad en que aquella Cámara se ha sentido de complementar la ley con un segundo proyecto.

De ahí también la disyuntiva forzosa en que el Senado se encuentra, de sancionar a sabiendas los defectos tangibles de aquel proyecto, dándole un voto condicional, o de apreciar correctamente el estado de la tramitación, y confeccionar un solo proyecto con las dos sanciones que de aquella Cámara le vienen.

Nunca como esta vez estará tan de relieve la errada doctrina que supone vigente la tramitación de un proyecto de ley a pesar del receso.

Nunca tampoco será ocasión más oportuna para restablecer en su verdadera inteligencia ese punto importante, corrigiendo por la práctica un desvío introducido también por la práctica.

En ese concepto, conviene que la Cámara de Senadores preste su aprobación al siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Convención que debe tomar en consideración la reforma de la Constitución

en el artículo 4º y en el inciso 1º del 67, se compondrá del mismo número de diputados y en la proporción que fija el artículo 38.

Art. 2º — Pueden ser electos diputados a la Convención, los que sean hábiles para diputados al Congreso.

Art. 3º — Las elecciones se practicarán con arreglo a la ley general de la materia, sirviendo de base los registros para ese fin, y en aquellas provincias donde esta formalidad no se hubiese llenado o resultase viciosa, se abrirá un registro durante ocho días consecutivos.

Art. 4º — La publicación de este registro durará ocho días.

Art. 5º — Las elecciones se practicarán el domingo 29 de Julio próximo.

Art. 6º — El escrutinio de las actas electorales tendrá lugar a los 15 días del de las elecciones.

Art. 7º — La Convención se instalará el 15 de Septiembre del presente año en la ciudad de Santa Fe.

Art. 8º — Los convencionales tendrán una compensación de mil pesos a más del viático que recibirán en la misma proporción que los miembros del Congreso.

Art. 9º — El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer los gastos que exija el cumplimiento de esta ley.

Art. 10. — Comuníquese, etc.

Sala de comisiones, Julio 4 de 1866.

Tadeo Rojo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Convóquese una Convención nacional con el único objeto de reformar la Constitución en el artículo 4º e inciso 1º del artículo 67, en la parte que limitan la facultad de imponer derechos de exportación.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

PEDRO URIBURU.
Carlos M. Saravia,
Secretario.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Convención que debe tomar en consideración la reforma de la Constitución, decretada por el Congreso, en el artículo 4º e inciso 1º del 67, se compondrá del mismo nú-

mero de diputados y en la proporción que fija el artículo 38.

Art. 2º — La elección se practicará en la misma fecha y en la forma que la ley prescribe para la de diputados al Congreso.

Art. 3º — Las mesas electorales recibirán separadamente los votos para una y otra elección.

Art. 4º — Pueden ser electos diputados a la Convención, los que sean hábiles para diputados al Congreso.

Art. 5º — La Convención se reunirá en la ciudad de Santa Fe.

Art. 6º — La Convención se instalará en los primeros días del próximo Abril.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo proveerá a los convencionales del mismo viático de que gozan los miembros al Congreso Legislativo, y terminadas sus tareas, se abonará a cada uno mil pesos como única dieta.

Art. 8º — El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer los gastos que exija el cumplimiento de esta ley.

Art. 9º — Comuníquese, etc.

PEDRO URIBURU.
Carlos M. Saravia,
Secretario.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Convóquese una Convención nacional con el objeto de reformar la Constitución en el artículo 4º e inciso 1º del artículo 67, en la parte que limita la facultad de imponer derechos de exportación y en la manera de imponer las demás contribuciones.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

JOSÉ E. URIBURU.
Rufino Varela,
Secretario.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Convención que debe tomar en consideración la reforma de la Constitución, declarada necesaria por el Congreso, en el artículo 4º e inciso 1º del 67, se compondrá del mismo número de diputados y en la proporción que fija el artículo 38.

Art. 2º — Pueden ser electos diputados a la Convención, los que sean hábiles para diputados al Congreso.

Art. 3º — La Convención deberá reunirse el 1º de Septiembre del presente año, en la ciudad de Santa Fe.

Art. 4º — Las elecciones se verificarán el domingo 22 de Julio.

Art. 5º — Los convencionales tendrán una compensación de mil pesos (1.000) además del viático de que disfrutarán en las mismas proporciones que los senadores y diputados.

Art. 6º — Las elecciones se practicarán con arreglo a la ley general de la materia, sirviendo de base los registros abiertos para ese fin, y en aquellas provincias donde esta formalidad no se hubiese llenado o resultase viciosa, se abrirá un registro durante ocho días consecutivos, cuya publicación se limita al término de quince días.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer los gastos que exija el cumplimiento de esta ley.

Art. 8º — Comuníquese, etc.

JOSÉ E. URIBURU.
Rufino Varela,
Secretario.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La publicación del registro cívico en las elecciones de diputados para la Convención nacional durará ocho días.

Art. 2º — El escrutinio de las actas electorales para la elección de convencionales se hará a los quince días de practicada la elección.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JOSÉ E. URIBURU.
Ramón B. Muñiz,
Secretario.

Sr. Alsina. — A mi me parecía conveniente — no se cuál será el juicio del Senado — para aclarar más las ideas, que empezara la lectura por el orden en que ha tenido lugar la presentación de los proyectos, es decir, por orden de fechas. Así ha debido ser impresa también la orden del día: primero la sanción del Senado; en seguida, la sanción de la otra Cámara, y a continuación lo que aconseja ahora la Comisión del Senado, por que de otro modo me parece que ha de resultar confusión.

Hago esta observación, consultando la claridad, nada más; si el Senado no lo cree conveniente, vamos adelante.

Sr. Presidente. — Si el Senado asiente a la idea del señor senador, podrá adoptarse.

Sr. Bazán. — Que se lea primero lo que dice la Comisión en su dictamen, y después de esta lectura se leerán los antecedentes en el orden que se ha pedido.

Sr. Presidente. — La indicación del señor senador es que se principie la lectura por la sanción dada por el Senado el año pasado.

Sr. Bazán. — Siempre se acostumbra principiar por lo que la Comisión propone.

Sr. Presidente. — Pero se ha creído que era mejor y más claro principiar la lectura de los proyectos por el orden en que han sido sancionados.

—Se leyeron por su orden cronológico, los diferentes proyectos que formaban la orden del día, terminando por el dictamen de la mayoría de la Comisión.

Sr. Presidente. — Los proyectos presentados por la Comisión en minoría serán tomados en consideración por la Cámara, en caso de que fuesen rechazados los que presenta la mayoría de la Comisión: está en discusión en general el informe de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales.

Sr. Frías (U.). — Supongo que el dictamen de la Comisión será tomado en consideración por partes, y en ese concepto voy a contraerme por ahora solamente al primer proyecto sobre la reforma de la Constitución, es decir, a la adición que propone la Honorable Cámara de Diputados.

Esta cuestión es muy grave, señor presidente, puesto que se trata nada menos que de ver si conviene o no reformar la Constitución en los puntos en que establece las fuentes que forman el tesoro nacional.

Esta Honorable Cámara, en las sesiones del año anterior, sancionó un proyecto declarando la necesidad de la reforma de la Constitución en el artículo 4º y en el inciso 1º del artículo 67, en la parte que limitan la facultad del Congreso para establecer derechos de exportación; y la Honorable Cámara de Diputados, en las presentes sesiones, después de un luminoso debate, ha aceptado el pensamiento del Senado, pero proponiendo a su vez que se declare también la necesidad de reformar la Constitución en la parte que se refiere «a la manera de imponer las demás contribuciones». Estas son las palabras textuales con que la otra Cámara ha adicionado el proyecto y que es el único punto en discusión, porque en cuanto a los derechos

de exportación ha recaído ya la sanción de ambas Cámaras.

La Comisión, al tratar de este asunto, tuvo que resolver una cuestión previa, propuesta por el señor miembro de ella que se ha presentado en disidencia, cuestión de que habla también en su informe escrito, a saber: si el proyecto del Senado caducó por el receso del Congreso del año anterior o lo que es lo mismo, si el proyecto de la Cámara de Diputados debe considerarse iniciado allí desde que lo ha sancionado al año siguiente del en que lo verificó el Senado.

La mayoría de la Comisión, atendiendo a la práctica constante observada tanto ahora como en tiempo de la Confederación sobre esta materia, cree que la sanción del Senado es válida aún en el presente año, y que por lo tanto, para los efectos legales, debe considerarse como un proyecto originario en su seno, como ha sido en efecto.

Una prueba de que esta ha sido la práctica observada en ambas Cámaras, está en el mismo proceder de la Honorable Cámara de Diputados, que se ha considerado como la Cámara revisora, y sólo en virtud de las enmiendas que ha introducido en el proyecto sancionado por el Senado, es que ella lo ha mandado a nueva revisión de esta Cámara, expresándolo así el presidente de aquélla en su nota de remisión.

Yo creo, señor presidente, que hay además razones bastante poderosas para sostener esta práctica y que ella debe seguirse mientras no se derogue por una ley, o al menos, por los reglamentos, o por la práctica contraria de ambas Cámaras. Voy a exponer muy brevemente algunas de esas razones.

La Constitución ordena que las Cámaras se han de reunir desde el 1º de Mayo hasta el 30 de Septiembre, y que aprobado un proyecto por una de las Cámaras, pase para su discusión a la otra, sin fijar término en que ésta debe expedirse. De consiguiente, por el solo hecho del receso, no debe considerarse que caduca lo que una de las Cámaras ha hecho en el término que la Constitución le prefija para sus funciones, por que lo hace en virtud de poderes que le confiere expresamente, porque, en una palabra, no hace sino usar de un derecho legítimo. Lo mismo sucede en la administración de justicia, en que no por cambiarse de jueces, quedan sin efecto en las causas pendientes las providencias que han dictado los magistrados que antes han conocido en ellas.

Por otra parte, la práctica contraria, atacaría la facultad que cada Cámara tiene de aplazar los asuntos sometidos a su conocimiento,

facultad consignada en sus reglamentos y que emana del precepto constitucional que las autoriza para sancionar esos reglamentos.

En fin, señor presidente: si bien es cierto, como lo sostiene el señor miembro disidente de la Comisión, que es conveniente que al dictarse una ley se consulte la opinión actual de ambas Cámaras, también es cierto que eso no puede hacerse siempre, porque la Constitución ha fijado un término a las sesiones del Congreso y tiene necesariamente que interrumpirlas todos los años. Además, y nótese bien esto, de que haya esa conveniencia, que es indudable, no puede deducirse con razón que sea nula o caduca la sanción de una Cámara, porque la otra, por cualquier motivo, no la haya tomado en consideración. Si ha variado la opinión de alguna de ellas, sea porque ha tenido lugar alguna renovación en sus miembros, o por cualquier otra causa, en su mano está remediar el mal, presentando un proyecto para que se derogue la medida que se hubiese sancionado. Me parece que estas ligeras consideraciones bastan para justificar el proceder de la mayoría de la Comisión, que reputa como proyecto originario de la Cámara de Senadores el que está en discusión. Pasando ahora al fondo de la cuestión, es decir, a la adición propuesta por la Honorable Cámara de Diputados, ella consiste, como antes lo he dicho, en que se declare la necesidad de reformar la Constitución, no sólo en la parte que limita la facultad del Congreso de establecer derechos a la exportación, sino también en la «manera de imponer las demás contribuciones». Esta enmienda, señor presidente, en los términos en que está concebida, daría a la Convención las más amplias facultades para variar completamente el sistema rentístico, establecido por la ley fundamental, y a primera vista se perciben los peligros que habría en que así lo hiciera aquella asamblea, especialmente en las circunstancias en que el país se encuentra.

Son muy conocidas las dificultades y las cuestiones que desde el principio de la revolución ha habido sobre la manera de formar el tesoro público de la Nación; y la prudencia aconseja no entrar en una nueva discusión sobre todos los puntos que abraza esta materia tan importante y tan delicada, sino solamente sobre aquellos que sean absolutamente necesarios, como sucede con respecto a los derechos de exportación. Esta sola consideración, pesó tanto en el ánimo de la mayoría de la Comisión, que luego de empezar a discutir el asunto

por la Cámara de Diputados, y que insistiese en su primer proyecto.

Verdad es que se dice por el señor miembro disidente de la Comisión, que la mente de la Honorable Cámara de Diputados, y es lo que él propone, es sólo la reforma del artículo 4º de la Constitución, en la parte en que establece que el Congreso puede imponer contribuciones proporcionalmente a la población.

La mayoría de la Comisión, señor presidente, entiende que así es la verdad, y según los datos que tiene, el honorable miembro de la Cámara de Diputados que propuso esta enmienda parece que al hacerla no se refirió sino a este punto; pero en primer lugar, señor presidente, los términos de la enmienda son tan generales, que indudablemente tienen el alcance que he dicho. En segundo lugar, aún en el supuesto de que no fuese así, aunque la enmienda se redujera únicamente a lo que propone el señor senador por San Juan, ¿cuáles son los hechos que han tenido lugar, cuáles son los que se prevén, para que sea necesario tocar la Constitución en esta parte? La reforma de la Constitución se ha promovido con mucha justicia, precisamente porque se limitó la facultad del Congreso en materia de impuestos cuando nadie efectivamente pudo prever las emergencias o necesidades del país dentro de algunos años; y ahora lo que se propone es quitar al Congreso una de sus atribuciones para establecer impuestos, sin embargo de que se reconoce que jamás ejercitará semejante atribución.

Parece fuera de duda, señor presidente, que el Congreso, en caso necesario, recurrirá a los derechos de aduana o a las contribuciones directas, y no a una contribución proporcional a la población, por las dificultades inherentes a esta clase de impuestos; pero ¿quién puede decir que no llegará nunca el caso de que sea necesario hacerlo así? Y si puede llegar ese caso, como no puede negarse, ¿por qué se ha de quitar al Congreso esa facultad en que en circunstancias dadas, podrá tal vez salvar a la República de su ruina? La Comisión no lo concibe.

Los que pretenden la reforma de la Constitución en esta parte, indudablemente temen la desigualdad que podría resultar en el pago de un impuesto basado en la población; pero ellos olvidan que todos los impuestos, tanto directos como indirectos, a pesar de los preceptos de la ley, a pesar de los esfuerzos de la autoridad, nunca pueden repartirse con la igualdad debida y que se desea, a causa de que a ello se oponen la organización misma de las sociedades y la imperfección que llevan

consigo las instituciones humanas. Olvidan también otra cosa muy importante, y es que la Constitución, al facultar al Congreso para imponer contribuciones en proporción a la población, establece que ha de hacerlo consultando también la equidad, que es la única y la mejor regla que podía darle en esta materia, observada la cual, como hay la presunción legal de que lo sería, llegado el caso, es indudable que los contribuyentes resultarían gravados con justicia y con la igualdad posible.

En fin, señor presidente, basar el impuesto alguna vez en proporción a la población, como lo prescribe la ley fundamental, es decir, consultando también la equidad, no es un absurdo, ni es una novedad tampoco en nuestra Constitución, que ha tomado en parte esa disposición de la de Estados Unidos.

La población es uno de los principales elementos de riqueza y de poder de los pueblos, y es por eso que la Constitución argentina contiene prescripciones terminantes para atraer la inmigración; es por eso que se concede a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los hijos del país; es por eso que no les impone la ciudadanía, y les concede muchos otros favores que es inútil enumerar.

Estos son, señor presidente, en resumen, los fundamentos que la mayoría de la Comisión ha tenido en vista para aconsejar a la Honorable Cámara que rechace la enmienda hecha por la Cámara de Diputados, así como lo que propone el miembro disidente de la Comisión, y que insista en su sanción primitiva.

Sr. Rojo (T.).—Yo entendía, señor presidente, que la gravedad del asunto sometido a la consideración del Senado, y la circunstancia — que he deplorado profundamente — de haber ocurrido en el seno de la Comisión una diferencia radical respecto a la manera en que debe ser apreciado para su consideración; parecía-me que nos imponían el deber de ser esta vez más extensos, más explícitos, más francos, por decirlo así, que en los casos ordinarios en que anticipamos nuestras opiniones a la consideración y al voto de la Cámara.

En esa inteligencia, y como yo disintiese de la mayoría que al fin se organizó en el seno de la Comisión, me sentí en la necesidad de formular un proyecto que respondiese a mi manera de ver el asunto, y lo he acompañado con las razones teóricas y las consideraciones prácticas que, a juicio mío, deben tenerse presente y determinar la resolución de la Cámara.

La mayoría de la Comisión, por medio del señor senador por Tucumán, acaba de expo-

ner verbalmente sus vistas en el asunto, y tengo que seguirle en ellas, aun cuando me aparte del orden de ideas que produjo en el informe escrito.

Pero antes de hacerlo, necesito observar la manera especial en que la mayoría de la Comisión presenta su despacho, sin ejemplo ni antecedente que le autorice en el transcurso de nuestra vida constitucional.

Me refiero a la particularidad de que una sola nota trajo de la Cámara de Diputados dos proyectos de ley a la vez; proyectos que, si bien tienen alguna conexión, no por eso dejan de ser proyectos distintos, y así debieron venir y ser caracterizados en distintas notas de remisión.

La mayoría de la Comisión, siguiendo el procedimiento de la Cámara, ha ido más adelante. Ella informa no solamente sobre aquellos dos proyectos distintos, sino que reúne también un tercero, cuya tramitación parlamentaria se encuentra en diferente estado con la intención manifiesta de confundir los tres bajo este aspecto y proponer al Senado las conclusiones de su informe; conclusiones que no le sería lícito proponer, como lo demostraré a su tiempo, si fuese consecuente con la doctrina que profesa respecto de la tramitación de los proyectos.

Pero, aunque son tres los proyectos que el despacho de la mayoría asimila, el miembro informante se ha referido principalmente al primero, al que declara la necesidad de reformar la Constitución, ordenando que se convoque una convención al efecto.

Respecto de este proyecto, se ha dicho, señor presidente, que es un asunto en que nada puede exponerse ya, pues el Senado emitió su fallo en las sesiones del año anterior.

A mí me parece que si efectivamente no puede añadirse cosa alguna al proyecto, ese será un inconveniente práctico de la doctrina de la mayoría de la Comisión, según la cual las Cámaras pueden expedirse en tal distancia de tiempo que aún cuando la opinión de cada una haya cambiado radicalmente, no le sea lícito concurrir a la elaboración de la ley con su propia opinión, sino que forzosamente ha de sostener la de su antecesor, o la misma suya, aunque ya no quiera mantenerla.

A pesar de esa doctrina y de esa práctica que impide que la opinión pública, que la voluntad actual del pueblo, sea la que impere y legisle, yo me voy a permitir una ligera referencia a una objeción que contra este proyecto se ha hecho, y que hasta hoy no ha sido

ni podido ser atendida por los que sostenemos la necesidad de la reforma.

He asistido a la discusión de este asunto en la Cámara de Diputados, y he oído, señor presidente, hacer al proyecto un reproche aparentemente fundado y muy grave.

Dejando el terreno de la conveniencia práctica por el de las teorías, un señor diputado por Buenos Aires arrojaba la siguiente aseveración, como un gravísimo cargo contra los que sostenemos la reforma.

La supresión de los derechos de exportación, según el señor diputado Ugarte, es necesaria para conservar la misma Constitución; porque, de otro modo, la unidad de la renta traerá la unidad del sistema político; esto es: la degradación del que tenemos hacia el unitarismo.

Yo creo, señor presidente, que no debemos extrañar una opinión semejante, si observamos que con frecuencia se olvida o desentien- de la naturaleza de nuestro sistema de gobierno.

Precisamente es unitario, por la esencia de sus principios, casi todo cuanto constituye las autoridades nacionales; y como la renta a que los derechos de exportación pertenecen o queremos que pertenezcan, es uno de los elementos del poder nacional, natural y forzosamente ha de ser una sola, aunque se saque de distintas y variadas fuentes.

Así, es de todo punto injustificable el reproche que se nos dirige, de que tendemos a cambiar de sistema político con la reforma propuesta.

Lejos de eso: hoy, como el año pasado, cuando por primera vez informé acerca de este proyecto, muy claro dije y se ha demostrado, que la reforma importa precisamente restituir al sistema aquella facultad indispensable para su conservación, que le quitó la Convención de 1860; y hoy añado que esta restitución se ha convertido en una necesidad vital, que el mero transcurso del tiempo va haciendo cada día más perentoria. Aunque el estado de guerra existía entonces, no podía asegurarse que la continuación de los derechos de exportación fuese positivamente indispensable, sino por una prudente previsión. Esta previsión se encuentra hoy más que justificada: los sucesos que entonces indicaban la conveniencia de la reforma, nos colocan hoy en la terrible disyuntiva, de restituir al Congreso la capacidad necesaria para votar la renta que la existencia del gobierno requiere, o de consentir, señor presidente, en que, dentro de un término más o menos próximo, ese gobierno deje de fun-

Esto, en cuanto a la primera parte del primer proyecto, el de la convocatoria.

Pero la Cámara de Diputados le ha agregado un objeto más a la Convención. Ella ha querido que la Constitución sea también reformada en cuanto establece la población como base proporcional de las demás contribuciones. Aún cuando los términos con que la Cámara se expresa no dicen esto precisamente, no puede caber duda respecto de su intención.

En este punto estamos en disidencia con la mayoría de la Comisión, por cuanto mis honorables colegas no creen necesaria, y sí peligrosa, reformar esa parte de la Constitución.

Yo juzgo, señor presidente que, teóricamente hablando, la población es aceptable como base proporcional para los impuestos, y prácticamente también, en todos aquellos países en que la capacidad de producir, la civilización y la cultura son uniformes entre el pueblo, porque entonces la contribución sería también equitativa y aun aritméticamente uniforme.

Pero, en países como el nuestro, en que la desigualdad social está tan pronunciada todavía, la contribución que tomara por base la población, se resentiría de la misma desigualdad; no sería equitativa, sino arbitrariamente injusta.

Permítaseme un ejemplo para demostrar que, en este punto, las teorías deben ceder ante los consejos de la observación y la evidencia prácticas.

Supongamos, señor, que en la actualidad tuviéramos un déficit de dos millones, y demos que la población de la República ascienda a la misma cifra. Si la contribución con que quisiéramos cubrir este déficit, se hubiese de imponer sobre la población como base proporcional, tendríamos que Santiago del Estero habría de concurrir con ciento sesenta mil pesos, y Buenos Aires, con algo menos de medio millón.

Y yo pregunto, señor presidente: ante la posibilidad práctica, única que prudentemente debe consultarse, al imponer una contribución, ¿no es un verdadero absurdo suponer que Santiago y Buenos Aires, se encuentren respectivamente en igualdad de condiciones? Y de esta misma manera y con idénticos resultados, podría seguir comparando todas las provincias que componen la Nación, para poner en evidencia que la población no será una base racional de contribución, mientras la República no esté en otras condiciones de industria y civilización.

Pero mis honorables colegas me observan, señor presidente, que esta contribución no se impondrá jamás.

Si yo quisiera argumentar solamente por obtener un triunfo estéril, admitiría como exacta

esa observación, y contestaría: si no se ha de usar semejante disposición, si es inaplicable, ¿para qué la mantenemos en la Constitución?

Mas mi objeto es y ha sido muy diverso. Yo he deseado que el gran paso que vamos a dar hacia la reforma de la Constitución, tienda a salvar ciertas dificultades, muy posibles, en las cuales correremos riesgo de perderlo todo.

No me refiero, señor, a las probabilidades de una nueva anarquía, ni a las pasadas desgracias de los desórdenes interiores.

Contemplo, sí, la posición de la República Argentina ante los poderes europeos.

Yo juzgo, señor presidente, que nuestra República, más que Chile, más que Perú y Bolivia, se encuentra hoy sosteniendo incesantemente el principio que nuestros padres proclamaron en 1810.

Allá, en el Pacífico, no se debaten principios fundamentales sino intereses pasajeros: cuestiones de honor o de intereses materiales.

Mientras tanto, la República Argentina está realizando la difícil tarea de hacer que se reconozca prácticamente el principio democrático en todas las aplicaciones que son su consecuencia indispensable. Quien tenga presente la serie de estipulaciones internacionales de la República, no puede menos de reconocer la exactitud de esta observación, pues allí verá cómo es que estamos ejecutando la obra laboriosísima, difícil y peligrosa, de hacer aceptar los principios opuestos a los que rigen la vida interna de los pueblos europeos. Y esta obra puede ser interrumpida el día menos pensado, con ocasión de la frecuencia creciente de nuestro contacto con Europa, cuya población y comercio es atraído por las condiciones naturales de nuestro territorio.

Citaré un ejemplo de los riesgos que corremos por esta causa; riesgos verdaderamente de trascendencia, pues en ellos va nuestra autonomía nacional.

Según lo que la memoria de Relaciones Exteriores nos dice y lo que nosotros sabemos, la buena armonía entre la República y el gobierno de Italia ha estado a punto de romperse.

¿Por qué?

Porque no se respetaba uno de los principios fundamentales de nuestra existencia como nación: la facultad de dictar leyes y de aplicarlas dentro de nuestro territorio.

Y si es evidente que tal es nuestra posición, ¿por qué negar la posibilidad de que, cuando menos lo pensemos, nos encontraremos bajo la presión de un bloqueo, que no está en nuestro arbitrio levantar a la fuerza?

Entonces, si tal sucediese, yo preguntaré a mis honorables colegas, ¿de qué viviría el gobierno argentino?

La renta principal, la única renta, puede decirse que proviene de las aduanas, que el bloqueo suspendería.

Sería forzoso, pues, ocurrir a las contribuciones directas; tendríamos que imponerlas conforme a la población numérica, o a la representación que tiene cada provincia; pero, como semejante contribución sería imposible de realizarse, tendríamos que caer de rodillas ante algún poder extranjero, y sacrificar el honor y la independencia de la República.

Yo creo, pues, que debemos ser un poco previsores; y ya que se trata de restituir al Congreso su capacidad para ocurrir a las necesidades económicas del gobierno, conviene pedir también a la Convención que reforme esa parte de la Constitución, en que, quizá por traducir demasiado a la letra una disposición extraña, se ha establecido una base aparentemente equitativa, pero injusta en la realidad, y que hará imposible la única fuente de recursos con que el gobierno puede contar alguna vez para sostener y salvar nuestra autonomía.

Pero todavía me objetan mis honorables colegas, que una doctrina y una práctica del Senado se oponen a que se haga en el proyecto la modificación que yo propongo para aceptar lo que la Cámara de Diputados ha agregado.

Si se considera el proyecto como originario del Senado, no podemos efectivamente innovar nada en la agregación que aquella Cámara ha hecho: debemos reducirnos a aceptar o rechazar esa agregación.

Yo no creo que semejante doctrina sea constitucional, ni tampoco la práctica consiguiente.

Si no estoy mal informado, señor presidente, esa doctrina ha tenido un momento muy notable, muy significativo, que me permitiré recordar, para poner en evidencia los abusos a que se presta.

En el Congreso de Paraná se discurren los «derechos diferenciales» como medida de hostilidad contra Buenos Aires; con ese objeto se sancionaron en un momento de pasión por una de las Cámaras; pero, como sobreviniese una entente cordial en las relaciones de ambas fracciones, se dejó dormir el proyecto en la otra Cámara, hasta que renovadas las hostilidades, aquella misma pasión lo sancionó y fué ley, a pesar de la interrupción que el receso causa en la vida legislativa, y sin que la Cámara iniciadora dos años antes, manifestase ni pudiera

Junio 9 de 1866

CAMARA DE SENADORES

manifestar si consentía, o no, en esa medida de hostilidad.

Sr. Elías. — Está equivocado.

Sr. Rojo (T.). — Parece que no lo estoy.

Sea como quiera, y aun cuando el hecho no fuese perfectamente exacto, no por eso sería menos posible, según la doctrina de la mayoría de la Comisión, ni menos significativo tampoco de su inconveniencia.

A más de que la Constitución contiene que todo proyecto desechado por una Cámara, no puede ya ser tomado en consideración hasta el Congreso siguiente, en que se reputará como nuevo proyecto.

Ante esta disposición, yo digo, señor presidente, que si un proyecto sancionado en una Cámara pasa a la otra y ésta lo relega en alguna de sus comisiones, o de cualquier otro modo hace con él lo que haría rechazándolo; yo digo que lo coloca en idéntica condición constitucional que el rechazado y que respecto de tal proyecto ha de regir la misma doctrina constitucional.

Porque yo entiendo que la autoridad legislativa que la Constitución atribuye al Congreso, es a condición de que la opinión y la voluntad de una y otra Cámara han de manifestarse o ejercerse simultáneamente, en cada uno de los períodos de tiempo que les están asignados para reunirse y funcionar.

La razón es que la base esencial del sistema representativo consiste en que la legislación y el gobierno se hagan por aquellos individuos con cuyas ideas, intereses o pasiones políticas esté conforme el pueblo, y en virtud de las cuales los reviste de su autoridad, y la votación de los empleos electivos sería inútil si los nuevos elegidos no tuvieran absoluta libertad para hacer valer su opinión, como sucedería, desde que se les impusiera la de sus antecesores, imperfecta aún, por falta de consenso oportuno. Así, el representante legítimo deja de serlo, cuando termina su período, y su sucesor en el puesto no puede, bajo ningún concepto, considerarse heredero forzoso de opiniones que pueden chocar con las suyas.

Aplicando estas teorías, para mejor demostrarlas, yo voy a suponer un caso muy posible. Supongo que el asunto que nos ocupa hubiese tenido origen en la Cámara de Diputados; que sancionado allí, nosotros lo hubiéramos modificado al año siguiente. Vuelto a aquella Cámara, que se ha renovado en más de la mitad de su personal, era muy posible que la opinión dominante fuese diversa. En

ción y sus antecesores, por más que quisiera, pues la doctrina que combato le impondría silencio, obligándola a prohibir una opinión ajena, contraria a la suya.

De esta manera se falsificaría la verdad de la representación, y se inutilizaría el objeto de la votación de los empleos.

Por eso entiendo que debemos reputar caduca, por el receso, la sanción de una de las Cámaras, siempre que el proyecto no complete su tramitación y se haya convertido en ley dentro del período anual de las sesiones.

En el caso que nos ocupa, esta manera de apreciar el estado de la tramitación, no solamente es exacta, según los principios constitucionales, sino que también es necesaria para que el Senado entre a considerar la segunda parte del asunto; aquello que fuera de los derechos de exportación, quiere la otra Cámara que la Convención reforme, y para que entre a la vez lícitamente a remediar los defectos que trae el proyecto reglamentario de la convocatoria.

Uno y otro proyecto, el de convocatoria y el reglamentario, se encuentran en igual estado de tramitación: lo que la Cámara decida que puede o no puede hacer en el primero, eso mismo se entenderá para el segundo y repito que éste adolece de errores que harán imposible la reunión de la Convención.

Efectivamente, señor. Sea descuido, ligereza o cualquier otra causa, el hecho es que la Cámara de Diputados nos remite el proyecto reglamentario de la convocatoria, sin haber abreviado proporcionalmente todos los trámites electorales, de modo que la Convención se reuna el día que el mismo proyecto designa. Peor que esto aún: el proyecto contiene un artículo, el 6º, por el cual el registro cívico estará publicándose algunos días después de haberse celebrado las elecciones.

La mayoría de la Comisión debía haber sido absolutamente franca, manifestando al Senado estas circunstancias, que por sí solas aconsejan que aquella práctica inconstitucional se interrumpa, y que la Cámara se considere como revisora del asunto, en toda la aptitud que le corresponde y necesita para modificar esos proyectos.

Esto es lo que tenía que decir acerca del proyecto de convocatoria.

Cuando se trate del reglamentario, que indubidamente se ha reunido en el mismo informe, tendré mejor oportunidad para patentizar la exactitud de mis consideraciones respecto de

aquella doctrina injustificable que ha motivado principalmente mi disidencia.

Sr. Frías (U.). — Voy a contestar en pocas palabras a algunas de las observaciones que ha hecho el señor senador que acaba de hablar, porque me parece que no todas lo necesitan, y porque algunos puntos, por ejemplo, lo que ha dicho respecto a los derechos de exportación, no deben discutirse, a juicio de la Comisión, y creo que de la Cámara.

Ante todo, señor presidente, debo hacer una declaración a la Honorable Cámara, que por olvido no hice antes, y es que el señor senador por La Rioja, con quien he hecho mayoría en la Comisión, no está conforme en que se tome por base del impuesto la población, pero cree que no debe aceptarse la enmienda de la Honorable Cámara de Diputados en los términos en que está concebida, y que no pudiendo ella reformarse, tampoco debe admitirse la que propone el señor senador por San Juan.

Después de esto, debo en primer lugar hacer presente, que no es la Comisión sino el honorable miembro disidente de ella, el que ha dicho que es de esperarse que jamás haga uso el Congreso de la facultad de establecer un impuesto con arreglo a la población. Así lo dice también en su informe escrito. La mayoría de la Comisión, y el que habla especialmente, no lo cree así, porque puede llegar el caso a que ha hecho referencia el mismo señor senador, de que esté ocupada por un enemigo una parte del país y sea necesario poner una contribución en relación con la población. Es extraño que él, que ha dicho, repito, que no creía que el Congreso...

Sr. Rojo (T.).—Esperar no es creer; es una simple esperanza.

Sr. Frías (U.). — Ahí está su informe, señor senador; por eso dije la primera vez que hablé, que se quería quitar una facultad al Congreso, a pesar de reconocerse que jamás la pondría en ejercicio. Atacando el dictamen de la Comisión, ha dicho que es monstruoso el resultado que daría un impuesto, tomando por base la población; pero como he dicho antes, el señor senador ha olvidado que la Constitución no dice sólo en proporción a la población, sino también teniendo en vista la equidad, que es la primera regla para la interpretación de las leyes y de los contratos. Así que el Congreso, si dictase una ley sobre el particular, no había de ver sólo el número de las personas o la población, sino también, consultando la equidad, la clase o las condiciones en que se encuentra esa población.

En cuanto a la cuestión previa que ha suscitado, a lo único que tengo que contestar, es al siguiente argumento. Dice el señor senador que rechazado un proyecto por una de las Cámaras, no puede repetirse en el mismo año; y que surte el mismo efecto, cuando ha sido sancionado por una Cámara y la otra no lo ha tomado en consideración; deduciendo de este hecho, que el proyecto queda nulo y sin efecto. Pero no hay semejanza, no digo igualdad, en ambos casos. En el primero hay un rechazo de una de las Cámaras, y conforme a la Constitución, el proyecto no puede repetirse el mismo año ni tiene que pasarse a la otra Cámara; y en el segundo, una de ellas le ha prestado su sanción, y lo pasa a la otra, que no se ha pronunciado sobre él; son, pues, dos casos enteramente distintos.

No dejo de reconocer que en algunas circunstancias sería inconveniente reputar vigente el proyecto sancionado por una de las Cámaras, y que la otra lo tuviese largo tiempo, un siglo, por ejemplo, sin considerarlo. En casos semejantes, en efecto, son manifiestos los inconvenientes que habría; pero no es lo mismo el caso de que se trata, ni se ha dado una ley que rija la materia, y creo que si se diese, nunca se señalaría el término de un año para que quedase caduca la sanción de una Cámara no considerada por la otra, y la razón es muy sencilla. El mandato de los diputados dura cuatro años; el de los senadores nueve; la Cámara de Diputados se renueva por mitad cada dos años, y el Senado cada tres, por terceras partes; y ¿por qué se daría sólo un año de plazo en el caso que nos ocupa, cuando el personal de las Cámaras es el mismo en ese tiempo, con muy pequeñas excepciones o tal vez exactamente igual? ¿Quién representa la opinión pública del país sino el Congreso? ¿Por qué se quiere entonces que por el simple hecho del receso, queden sin valor los proyectos que sanciona una Cámara y la otra no los discute, tal vez por causas muy justas?

Eso no puede ser.

Sr. Rojo (T.). — Pido la palabra solamente para explicar el error en que, a mi juicio, se incurrir, al apreciar lo que hemos convenido en llamar cuestión previa, a saber: si la sanción de una Cámara caduca por el receso.

El miembro informante de la mayoría de la Comisión entiende que no es la misma cosa rechazar un proyecto, que relegarlo al olvido hasta el siguiente año o período legislativo.

Yo encuentro que, aunque aparentemente diversas, son la misma cosa respecto del estado constitucional de la tramitación, y paso a de-

mostrarlo, abundando en el sentido de mis anteriores demostraciones.

Lo que da fuerza y validez a los proyectos es única, exclusivamente, el voto de la mayoría de las Cámaras, mejor dicho, del Congreso; pero a condición de que el voto de esas mayorías ha de ser simultáneo, pues sólo así se comprende por qué y para qué las Cámaras son llamadas por la Constitución a funcionar a un mismo tiempo dentro de períodos anuales.

Supongamos un proyecto sancionado en alguna de las Cámaras, que pasa en revisión a la otra; es decir, que va buscando el voto de esta Cámara para adquirir el carácter y valor de «acto legislativo».

Si este proyecto encuentra en la Cámara revisora una mayoría favorable, por más que la Comisión se niegue a despacharlo, la mayoría omnipotente y única dueña del poder en esa Cámara; la mayoría lo sacará, si es preciso, de la carpeta de la Comisión, lo tomará en consideración, y lo convertirá en acto legislativo.

Si no, cuando a un proyecto le falta el favor de una Cámara, dormirá en la Comisión el sueño del período y del receso; y si la Comisión u otra minoría lo despacha, esto es, si obliga a la Cámara a que expresamente manifieste su opinión al respecto, caerá el proyecto bajo el disfavor o la indiferencia de la mayoría, y será rechazado.

¿Qué diferencia se encuentra entre el proyecto rechazado y el proyecto abandonado hasta el receso?

Para mí, ambos están en idéntica condición respecto a la voluntad del Congreso, que, en uno y otro caso, es visto que no ha consentido en que sea ley.

¿O se quiere formar esta voluntad, asociando la opinión de las Cámaras en diversos períodos legislativos?

Si se pretende semejante cosa, es preciso, para ser consecuentes, no limitar la distancia de tiempo que pueda mediar entre una y otra sanción; y entonces, sucederá que una sanción de la Cámara de Senadores de 1865, por ejemplo, podrá ser lícitamente asociada a igual sanción de la otra Cámara cinco, diez, cien años después, y el consorcio de ambas, haría la ley.

Este resultado, que considero absurdo, sería debido a la aplicación de la doctrina de la mayoría de la Comisión, que niega la que yo profeso, de que la sanción de una Cámara y aun la de ambas, caduca por el receso, si antes no ha llegado a convertirse en ley.

Sr. Alsina. — Señor presidente, procuraré ser en lo posible conciso.

Relativo a la cuestión capital, que envuelven estos proyectos, no hay duda alguna en cuanto a que debe convocarse una Convención con el objeto de reformar la Constitución en lo relativo a los derechos de exportación; en esto hay uniformidad: eso es la ley. Creo oportuno únicamente advertir que esta cuestión no fué bastantemente agitada en el Senado, por la razón poderosa de que no hubo ocasión ni motivo para que lo fuera.

Ya observé, señor, el año anterior, que era de indispensable necesidad para la vida regular de la Nación, alguna resolución concerniente a la continuación o al cese de estos derechos de exportación. Esperé que ya en esta Cámara, ya en la otra, y sobre todo que por el Poder Ejecutivo se presentase la idea de esa necesidad, y no dudé jamás que se propondría algo a este respecto; pero entre tanto, la sesión legislativa iba adelante, tocaba a su término y aún reinaba un profundo silencio en todos los poderes. Fué por eso que bajé de esa silla, volví a ocupar este lugar, y propuse la idea de que se convocara la Convención. Como tal idea encontró grande, quizá universal acogida en el Senado, no hubo discusión: no hubo motivo, pues, de entrar a dilucidarla; y ahora tal cosa sería inoportuna, porque es una idea aceptada por la inmensa mayoría de las dos Cámaras. Únicamente, señor, pido permiso al Senado para decir dos palabras, no acerca de la conveniencia de tal disposición, pues ya está determinado que así se haga, y que se reúna la Convención con ese objeto, sino con la mira de justificar la moralidad de esa resolución, que he visto atrozmente combatida por la prensa. He oído muchas veces que era de necesidad sostener la Constitución; he oído acusar al Congreso de que la violaba; y entre tanto, señor presidente, una sola razón traeré a los recuerdos de este Cuerpo.

Creo en conciencia que si alguna provincia de las de la República, no puede invocar la doctrina que he visto invocar en este negocio, es precisamente la de Buenos Aires. Otra, talvez podría proferir algo en ese sentido, pero no la de Buenos Aires. Hay justicia y un derecho perfecto en el Congreso, para votar lo que ha votado; no la hay en la provincia de Buenos Aires, por una especialísima razón, que he visto olvidada absolutamente de todos.

Señor presidente: regía en la Confederación una Constitución en la que había un artículo según el cual, dicha Constitución no podía ser tocada ni reformada sino al vencimiento de diez años de su fecha; y esa disposición fué preciso hacerla a un lado, en virtud de las circunstancias que después sobrevinieron en la República.

De resultas de esas circunstancias, reunióse aquí en Buenos Aires, una Convención. Esta Convención resolvió que se hicieran las reformas que creyó conveniente en la Constitución de la Confederación; reformas, enmienda, modificaciones, que vinieron entonces a ser la expresión de la voluntad de la provincia de Buenos Aires; o sino, dígaseme ¿qué significan los pronunciamientos de su Convención?

Y bien; una de las sanciones de esa Convención, fué, en vez del artículo que decía que sólo podía reformarse cada diez años, establecer que se puede reformar la Constitución cada año, cada mes; y si no quiere decir esto, rogaría que cualquiera señor senador se sirviera explicarme su significado. El Congreso, pues, está facultado, y especialmente por la provincia de Buenos Aires, para promover cuando a bien lo tenga la reforma de la Constitución, en todo, o en parte, como dice el artículo.

No es esto abogar ni sostener que así lo deba hacer el Congreso, ni andar retocando la Constitución a cada paso; pero tiene el derecho de hacerlo cuando lo crea de necesidad.

Y bien, pues; ha llegado una circunstancia en que el Congreso ha juzgado que era de necesidad al bien de la Nación la continuación de esos derechos: puedo estar equivocado en este juicio, pero que haya sido inconstitucional, que haya violado el pacto, cuya observancia había jurado; que haya atropellado y dado al polvo el código que nos rige, no, señor. Eso ha sido una calumnia levantada por la reflexión contra el Poder Legislativo del Estado. Derecho perfecto tiene, y derecho pregonado y levantado en alto, y hecho triunfar, precisamente por la provincia donde hoy oigo pregonar otras doctrinas.

Muy largo podría yo ser a este respecto, si ello fuera el objeto de la discusión. Por eso me atreví a pedir el permiso del Senado para hacer notar esa circunstancia, nada más.

En cuanto a la cuestión, que parece ser la que ocupa la atención de este Cuerpo, yo estoy porque no acepte el Senado la adición con que viene apoyado el proyecto que envía la otra Cámara; y sin entrar al fondo de lo que importa esa resolución de aquella Cámara, me bastará, señor, esta razón. Dejo a un lado que es informal el modo cómo viene el artículo. No se va a una Convención para que establezca reformas así en general, en cuanto a la manera de establecer las contribuciones. No, señor: es preciso determinarlas bien, fijarlas, presentarlas netamente a esa Convención, para que ella establezca lo que crea conveniente establecer; pero no es sólo el defecto de forma lo que en-

cuentro. ¿Se tiene acaso una idea de todo lo que comprenden esas palabras, que constituyen la adición? «Reformas en cuanto a la manera de establecer las contribuciones»; véase lo inmenso y vago de un encargo semejante. Yo quisiera que se me dijera si se ha calculado el tiempo que necesitaría una Convención para proyectar y discurrir tan vastas reformas; al paso que es de necesidad que la Convención que se reuna, ocupe el menos tiempo posible. Por eso fué que yo prescindí totalmente de las supresiones que hizo el Senado en el proyecto que presenté el año precedente. Yo juzgué que la Convención, ya que se reuniese para tratar de los derechos de exportación, podía al mismo tiempo tratar de tales o cuales otros puntos. Se creyó que no y me conformé. Ahora se propone que la Convención se ocupe además de una materia vastísima, y sobre todo, indeterminada, pues no se sabe qué es lo que acerca de ella piensa el Congreso, ni tampoco cuál es el sentimiento del país que representa, relativo a tal o cual objeto o cuestión que se suscite. Preciso sería, pues, presentarla claramente. Así es que me bastaría esta sola razón, para no estar por la adición de la Cámara de Diputados.

En lo concerniente a la duda que parece agitar la mente de un señor senador, yo concibo que él puede aquietarse, persuadiéndose de que observando el método que hasta aquí, no sólo no se quebranta, sino que se observa perfectamente la Constitución. Extraño que ahora recién se promueva la duda acerca de la tramitación de un proyecto; y que se haya podido creer que si va de esta Cámara a la otra un proyecto sancionado, y ella no quiere o no puede tomarlo en consideración en ese año, muere el proyecto, se acaba, caduca. Es esta una doctrina completamente nueva, y algo más, nociva.

Si eso se admitiese, debía ser consagrado por una ley expresa y terminante; no basta verterlo hoy meramente como una opinión y mucho menos dándole fuerza retroactiva y aplicándola a casos pasados; sería necesario una ley que estableciera ese punto, a saber, que el recesso concluye con los proyectos que una Cámara haya transmitido a la otra. Esto sería desacertado, pues es evidente que muchos proyectos tienen que ir a última hora, en el mes de Agosto o en el de Septiembre, precisamente en los meses más ocupados de las Cámaras y en que no hay tal vez lugar para dedicarse a su estudio; pero aun prescindiendo de esto, desde el momento que existiera semejante práctica, cada una de las Cámaras tendría en su mano el medio de tirar por los suelos las sanciones de la otra sin comprometerse, diré así,

sin trabajo y sin emitir opinión, con simplemente no despachar el proyecto que le fué enviado, pues vendrá el receso y caducará el proyecto. Se dice que lo renovarán en la sesión siguiente, pero ¿quién?

Sr. Rojo (T.). — Quien quiera.

Sr. Alsina. — ¿Y si nadie quiere?

Sr. Rojo (T.). — No se legisla sin la voluntad de los diputados.

Sr. Alsina. — ¿Y si ningún diputado o senador quiere renovar ese proyecto? Pregunto más: ¿quién le exige a esa Cámara o a los individuos que la componen, el que tomen en consideración el proyecto tal que ya caducó?

Sr. Rojo (T.). — Nadie.

Sr. Alsina. — Si nadie exige, nadie está obligado, porque la exigencia es un derecho a que corresponde un deber.

No hay, pues, en nadie el derecho de exigir. De modo, pues, que es cierto que semejante ley o práctica pondría en manos de una Cámara el medio más sencillo de rechazar los proyectos de la otra, sin tomarse el trabajo de examinarlos y discutirlos y sin comprometerse ante el país. Sólo no despachar el proyecto se reputaría ya una votación negativa. En fin, señor, sería el proceder más extraordinario el que diese por caducado un proyecto que pasase de una Cámara a la otra, por solo el hecho de no ser tomado en consideración por ella. Lo natural y naturalísimo, lo que siempre se ha hecho entre nosotros, y me parece que en todas partes del mundo también, es suponer que la sesión legislativa se interrumpe por el receso, pero no muere. Un asunto que no se haya podido ventilar ni aun hasta el mes de Septiembre en que terminan las sesiones, queda naturalmente para el año venidero.

Me parece extremadamente sencillo este procedimiento y creo que el señor senador, a no ser que insista en sostener sus ideas, debe mirarlo así y creer que observando el Congreso tal proceder, no infringiría la Constitución ni faltaría a sus exigencias; todo lo contrario. Cuantas veces, señor presidente, un proyecto que viniera de la Cámara de Diputados a la del Senado, en el último mes de las sesiones y que necesitase un serio examen, el Senado tendría que expedirse apresuradamente sobre él sin la meditación necesaria a fin de evitar que llegue el día de la clausura y le daría salida, fuera como fuese, ya negando, ya aceptando, ya modificando. No precipitemos así las cosas. El orden que se observa es, sin duda, el más prudente. No ha podido una Cámara considerar un proyecto que le ha sido enviado por la otra, llega el receso y lo deja para continuar-

lo en el año siguiente, pues en el receso no importa otra cosa que la interrupción de las sesiones por un tiempo dado.

Así, señor, yo estoy conforme respecto al proyecto en general y como lo ha dicho el miembro informante de la mayoría de la Comisión, creo que no puede haber dificultad en sancionarlo.

—Se dió el punto por suficientemente discutido.

Sr. Victorica. — Pido la palabra únicamente para expresar que mi voto en contra del dictamen de la Comisión, no significa otra cosa sino que estoy en contra de la idea general de la ley, que es una sanción que acato, y éste hubiera sido también mi voto si hubiera tenido el honor de asistir a las sesiones del año anterior en que tuvo lugar dicha sanción.

Sr. Presidente. — Se votará si se acepta o rechaza la adición introducida por la Cámara de Diputados; si se rechaza, eso importará que el Senado insiste en su primitiva sanción.

Sr. Alsina. — ¿Cuál es el artículo que presenta la Comisión? Sírvese leerlo el señor secretario.

—Se leyó.

Sr. Presidente. — Se ha introducido una adición sobre la manera de imponer contribuciones; sobre esa adición debe recaer la votación.

Sr. Rojo (T.). — Deseo recordar la práctica observada en casos idénticos; la votación se ha reducido a ver si se aprueba el dictamen de la Comisión.

Sr. Frías (U.). — Así es.

Sr. Presidente. — El dictamen de la Comisión es que se rechace el agregado hecho por la Cámara de Diputados.

Sr. Frías (U.). — Pero desde que la Cámara quiere votar el dictamen de la Comisión, ¿qué inconveniente hay en ello?

—Se votó si se aprobaba el dictamen de la Comisión, insistiendo el Senado en su anterior sanción y resultó afirmativa de 17 votos contra 3, quedando el proyecto sancionado como sigue:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Convóquese una Convención Nacional con el único objeto de reformar la

Constitución en el artículo 4º e inciso 1º del artículo 67, en la parte que limitan la facultad de imponer derechos de exportación.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

—Se pasó a cuarto intermedio.

—Vueltos los señores senadores a sus puestos, el señor presidente puso en discusión la última parte del dictamen de la Comisión.

Sr. Presidente. — La última parte de este dictamen es lo que únicamente debe ponerse en consideración del Senado, por cuanto los demás períodos se refieren a la adición que ha sido rechazada; ya está, pues, en discusión.

Sr. Frías (U.). — La mayoría de la Comisión aconseja al Honorable Senado, que acepte las enmiendas hechas por la otra Cámara al proyecto reglamentario de la convocatoria de la Convención. Esas enmiendas, como ha expresado en su informe escrito, son necesarias desde que la Convención no ha podido reunirse en el tiempo que prefijaba el proyecto del Senado. Esto me parece que es bastante para justificar el dictamen de la Comisión acerca del particular. Ahora en cuanto al inconveniente que el miembro disidente de la Comisión expresa con este motivo, me parece que no existe. La Honorable Cámara de Diputados ha hecho enmiendas en un proyecto sancionado por el Senado. Es indudable que conforme al texto de la Constitución, esta Cámara tiene derecho para aceptar o rechazar esas enmiendas. La Comisión propone que se acepten todas, rechazándose solamente aquella que dice: cuya publicación se limita al término de quince días. Y como ha venido también otro proyecto en revisión sobre el mismo asunto, es claro que conforme a la misma Constitución tiene la Cámara la facultad de aceptarlo o rechazarlo. La Comisión aconseja que se acepte también, con sólo la diferencia de que se agregue al otro proyecto en el lugar correspondiente. No hay, pues, el conflicto que supone el señor miembro disidente. Me parece que lo dicho es bastante para justificar el proceder de la Comisión.

Sr. Rojo (T.). — No puedo menos de observar, señor presidente, que en el despacho de la mayoría de la Comisión hay una confusión intencional de dos proyectos distintos que la Cámara debe considerar en distinto tiempo y que se encuentran en distinto estado de tramitación.

Uno es, señor, el proyecto de ley reglamentario de la Convención que ya discutió el Se-

nado el año anterior, y es el otro ese que yo llamaré segundo reglamentario que la Cámara de Diputados ha iniciado para rectificar algunos descuidos o defectos del segundo.

Si hemos de estar a la doctrina que se pretende aceptada implícitamente por el Senado tenemos que expedirnos respecto del primer proyecto «admitiendo o rechazando» las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, sin que por ningún pretexto, bajo ninguna forma, nos sea lícito innovar esas modificaciones, ni aquello más que el proyecto contiene y acerca de lo cual han estado acordes ambas Cámaras.

No sucede lo mismo con el segundo proyecto reglamentario, iniciado en la Cámara de Diputados y que el Senado puede modificar libremente.

La mayoría de la Comisión debía, pues, haber sido franca y explícita, diciendo al Senado que estos dos proyectos se hallan en distinto estado de tramitación, y que no puede hacer en el primero lo que le es lícito en el segundo.

Sr. Frías (U.). — Así lo ha hecho la Comisión, a pesar de la malicia que le ha imputado el señor senador.

Sr. Rojo (T.). — Perdone el señor senador: no he hablado de malicia.

Decía, señor, que el despacho de la mayoría parece haber confundido uno y otro proyecto, con la intención de que se entienda que el Senado se halla respecto del primero, en la misma aptitud de innovar que tiene respecto del segundo.

Y decía también, señor presidente, que aquí es donde prácticamente se presenta como un obstáculo insuperable, la aplicación de la doctrina que he combatido al tratarse el proyecto de convocatoria.

Según la mayoría misma de la Comisión, el artículo 6º del primer proyecto reglamentario, es inadmisibles, especialmente en la parte final de sus disposiciones; y yo entiendo también que allí ha padecido la Cámara de Diputados un notable descuido.

Pero, como ese artículo es obra exclusiva de aquella Cámara, como se considera una de las reformas introducidas al proyecto del Senado, ¿con qué facultad se nos propone que reformemos esa reforma?

Podemos rechazarla o aceptarla, pero innovar en ella, no; y digo innovar, porque eso importa cercenar la última parte del artículo, para reemplazarla con los del segundo proyecto reglamentario, o con cualesquiera otras disposiciones.

Es evidente, señor, que el Senado se encuentra en la disyuntiva que he indicado: o rompe la práctica que se dice establecida, o rechaza las modificaciones que la Cámara de Diputados ha introducido en el primer proyecto reglamentario, haciendo así imposible la reunión de la Convención.

Porque la Cámara de Diputados, al abreviar los términos de los trámites electorales con la mira de que la Convención se reuniese el 1º de Septiembre, no contó con la demora que el proyecto ha sufrido, no redujo tampoco uno de esos términos.

Ella esperó que la tramitación del proyecto concluiría en cinco días, si no estoy mal informado. Ya van trascurridos quince, y es de temer que la elección no tenga el tiempo material que se necesita para hacerse el 22 de Julio.

Y si a esto se agrega que tampoco se ha reducido el término que la ley de elecciones señala para la publicación de los registros, veremos el peligro que hay de que la Convención no pueda reunirse el 1º de Septiembre.

Sr. Frías (U.). — Como la Cámara comprenderá, me parece que la Comisión no puede haber tenido la mala intención que le ha atribuido el señor senador por San Juan, a no ser que pretenda que ha querido engañar al Senado; pero ¿con qué objeto o interés? Ni la Cámara es tan engañable, como parece lo supone el señor senador.

En cuanto a lo demás que ha dicho el señor senador, francamente, me parece que apoya el dictamen de la Comisión. En efecto, cuando viene de la otra Cámara con enmiendas un proyecto que ha sido sancionado anteriormente por ésta, la Cámara, conforme a la Constitución y a lo que dice el mismo señor senador, tiene facultad para aceptar o rechazar en parte esas enmiendas: y lo que la Comisión aconseja, es que el Senado acepte las que propone la Honorable Cámara de Diputados, y rechace solamente una, la que antes he expresado. Esto, me parece, es claro como la luz.

El otro proyecto que ha pasado la otra Cámara, viene sólo en revisión, no a nueva revisión, y el Senado, según el texto expreso de la Constitución, como no puede negarlo el señor senador, y según lo que el mismo dice, tiene la facultad de aceptarlo con o sin modificaciones, o de rechazarlo; la Comisión propone que sea aceptado, pero formando parte del anterior proyecto. ¿Dónde está entonces el conflicto de que ha hablado el señor senador? El Senado no hace, pues, otra cosa, sino usar de sus atribuciones.

En cuanto a la última observación que el señor senador ha hecho, sólo diré que hay tiempo para que la ley vaya a las provincias y se pueda hacer la elección en el tiempo que prescriben los proyectos. Yo supongo que inmediatamente de ser sancionada esta ley, el Poder Ejecutivo la comunicará a las provincias por medio de expresos; porque no puede ocultársele, lo que a cualquiera le viene a la cabeza, que siendo los términos tan cortos, no puede hacerse si no de ese modo.

Sr. Rojo (T.). — Pido la palabra únicamente para dar una ligera explicación y concluir con este debate que para mí es pesado y hasta cierto punto odioso.

Cuando el Senado va a dar su voto en este asunto, señor presidente, debe cerciorarse de que, no solamente va a aprobar o rechazar la innovación introducida por la Cámara de Diputados, sino que va a innovar a su vez una parte de las reformas de aquella Cámara en dos nuevos artículos, que no importa que estén en el proyecto, para que no sean de todos modos una innovación.

Pero, señor presidente, yo creo que es tal la voluntad de reunir la Convención, que me parece que todos los señores senadores y casi todos los miembros del Congreso, están resueltos a pasar sobre cualesquiera consideraciones, sin quererse detener a observar los inconvenientes que dejan sin resolver para ir a la misma Convención: si es posible que se haga el 22 de Julio el tiempo lo dirá; la experiencia lo enseñará mejor que todas las demostraciones a viva voz.

Sr. Alsina. — Pido la palabra, únicamente para aclarar mis ideas, probablemente confusas.

He oído decir que las alteraciones o adiciones que vengan de la otra Cámara a la original, pueden ser aceptadas o desechadas, pero no innovadas.

Sr. Rojo (T.). — Sí, señor.

Sr. Alsina. — Tengo dudas a este respecto, y deseo que el señor secretario lea el artículo 71, — me parece que es — de la Constitución, que habla de esto.

—Se leyó.

Sr. Alsina. — No sé si hay algún otro artículo que hable de esto; pero ese dice lo que se ha de hacer, y es: que las adiciones o las reformas que vengan de la Cámara revisora, que es la Cámara de Diputados hoy, si son aprobadas o desechadas, se hará esto o lo otro; pero no dice que únicamente han de ser apro-

badas o desechadas, y no pueden ser alteradas. Yo no encuentro que diga tal cosa, ni veo la razón que pueda haber para haber establecido semejante prohibición.

Era lo único que tenía que decir, porque tengo que manifestar al Senado la indispensable necesidad de hacer algunas alteraciones en algunos de los artículos del proyecto que viene de la otra Cámara; pero ahora estamos en la discusión en general, podemos concluir e ir después artículo por artículo.

Sr. Frías (U.). — La primera parte del dictamen de la Comisión, es que se acepten las enmiendas hechas por la otra Cámara, en el proyecto reglamentario de la convocatoria, con la supresión de las palabras «cuya publicación se limita al término de quince días».

Sr. Alsina. — A mi juicio, es necesario hacer algo más, y es por eso que es necesario leer artículo por artículo.

Sr. Presidente. — Así se ha de proceder; pero antes es necesario votar si se aprueba el dictamen de la Comisión en general.

—Se votó y resultó afirmativa de 15 votos contra 5.

Sr. Alsina. — Lea ahora el señor secretario artículo por artículo.

—Así se hizo y se dieron por aprobados los artículos 1º y 2º.

—Se leyó el 3º.

Sr. Alsina. — Este artículo 3º, es el que más me ha llamado la atención, y desearía que la Comisión tuviera la bondad de contestarme: ¿importa esta prescripción un mandato positivo? ¿La Convención se ha de reunir precisamente tal día? ¿O qué significa esa designación de un día; designación que yo reputo imprudentísima? O en otros términos: ¿y si la Convención no se reúne el 1º de Septiembre, ya no hay Convención, o se puede reunir después?

Sr. Frías (U.). — Sí, señor.

Sr. Alsina. — Entonces, ¿a qué viene decir que se reunirá tal día, puesto que está en su poder no reunirse en ese día, sino cuatro o seis días después? Ahí, señor, la otra Cámara, al introducir esta variación, no ha tenido presente lo que establecía mi proyecto originario, es decir, que la Convención se reuniría en los primeros días de Abril. Ahora no se dice, en los primeros días, sino en tal día, pero puede surgir la duda sobre la nulidad del acto, si se reúne fuera del día que la ley ha designado. Esto es lo que yo quiero evitar; y por eso con-

sidero que sería mejor poner en los primeros días de Septiembre, en vez de tal día.

Sr. Granel. — Habría la misma dificultad.

Sr. Alsina. — No, señor; porque este es un término prudencial que no está circunscripto a veinticuatro horas y nada más.

Sr. Frías (U.). — Yo creo que no se llenaría tampoco el objeto con decir solamente los primeros días, porque muy bien podría no reunirse en los primeros días.

Sr. Alsina. — Entonces no se reúne nunca, señor.

Sr. Frías (U.). — No, señor; debe reunirse de todos modos.

Sr. Alsina. — Entonces con más razón quítese la designación de un día, y póngase todo el mes de Septiembre.

Sr. Frías (U.). — Es mejor designar este tiempo, para que los convencionales puedan estar en Santa Fe el día que se fija, así como la Constitución ha designado el día en que deben estar reunidos los senadores y diputados, porque, ¿hasta cuándo duran los primeros días del mes; hasta el ocho, hasta el diez o hasta el quince?

Sr. Alsina. — Los últimos no son los primeros, señor; yo estoy en oposición a que se fije un solo día.

Sr. Piñero. — Yo creo que puede pasar la ley como lo propone la Comisión. A mi juicio, la fijación de un día, no quiere decir que si se reúne después la Convención, es nula. La Constitución dice que el Congreso se abrirá el 1º de Mayo, y en este año se ha abierto el 8. ¿Es nulo, por eso, el Congreso? No, señor. Fíjese un día como término general; pero si se rompe un carruaje, o tiene lugar cualquiera otra circunstancia que impida la reunión de la Convención en el día fijado, no queda nula por eso.

Sr. Alsina. — La designación de un término debe hacerse, ¿y por qué no poner los primeros quince días, o los primeros días de Septiembre?

Sr. Frías (U.). — Yo hago moción para que se vote.

Sr. Presidente. — Se va a votar si el punto está suficientemente discutido.

—Se votó y resultó afirmativa general.

—En seguida se votó el artículo 3º y fué aprobado por afirmativa de 15 votos contra 5. Entró en discusión el artículo 4º.

Sr. Navarro. — Ya que parece que la Cámara ha admitido la legalidad de hacer innovaciones en este proyecto, me parece que convendría traer este artículo 4º a formar parte del artículo 6º, que dice que las elecciones se practicarán

con arreglo a la ley de la materia, y el artículo 5º ponerlo en lugar del artículo 4º, de manera que no quedase intercalado un artículo que habla, por ejemplo, de la retribución que han de tener los convencionales, entre los artículos que hablan únicamente de las disposiciones relativas a la elección. Consultando, pues, la perfección de la ley, si la Comisión no tiene inconveniente, podía darse a estos artículos una nueva colocación.

Sr. Frías (U.). — La Comisión no acepta la modificación, porque lo mismo es que estén ahí los artículos que en otra parte.

Sr. Navarro. — Hay una imperfección, porque primero habla de la elección, en seguida habla de la cuota de los convencionales y después vuelve a hablar de la elección.

Sr. del Barco. — Es cuestión de simetría, señor presidente; podemos votar.

—Dado el punto por suficientemente discutido, se votaron y fueron aprobados por afirmativa de 15 votos contra 5 los artículos 4º y 5º.

—Entró en discusión el 6º.

Sr. Frías (U.). — La Comisión propone que se acepte este artículo, solamente hasta las palabras «durante ocho días», y aconseja que se rechace la frase, «cuya publicación se limita al término de quince días», por las razones que antes he dado.

—Se votó el artículo con la supresión indicada por la Comisión, y fué aprobado por afirmativa de 15 votos contra 5.

—Entró en discusión el artículo 7º.

Sr. Frías (U.). — La Comisión propone que después del artículo 6º se ponga el del proyecto de la Cámara de Diputados que dice: «la publicación del registro cívico en las elecciones de diputados para la Convención nacional durará ocho días.» Es decir, que éste debe ser el artículo 7º.

—Se votó el artículo 7º propuesto por la Comisión y fué aprobado por afirmativa de 17 votos contra 3.

—Entró en discusión el artículo 8º.

Sr. Madariaga. — He pedido la palabra, únicamente con el objeto de declarar al Senado que esperaba la terminación de la votación, para manifestar que no estuve presente en las sesiones del año pasado, en que esta ley se inició. Si me hubiese encontrado, habría fi-

gurado mi voto y mi palabra tal vez en primera línea, en contra de este proyecto; pero, como ahora no se trata sino de aprobar o desaprobado lo que se ha hecho, he estado votando por la afirmativa.

—Se votó bajo el número 8º el artículo 2º del nuevo proyecto de la Cámara de Diputados como lo proponía la Comisión, y fué aprobado por afirmativa de 17 votos contra 3.

—Los artículos 7º y 8º del proyecto fueron aprobados bajo los números 9º y 10, quedando el proyecto sancionado como sigue:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Convención que debe tomar en consideración la reforma de la Constitución, declarada necesaria por el Congreso, en el artículo 4º e inciso 1º del 67, se compondrá del mismo número de diputados y en la proporción que fija el artículo 38.

Art. 2º — Pueden ser electos diputados a la Convención los que sean hábiles para diputados al Congreso.

Art. 3º — La Convención deberá reunirse el 1º de Septiembre del presente año en la ciudad de Santa Fe.

Art. 4º — Las elecciones se verificarán el domingo 22 de Julio.

Art. 5º — Los convencionales tendrán una compensación de mil pesos (1.000) además del viático de que disfrutarán en las mismas proporciones que los senadores y diputados.

Art. 6º — Las elecciones se practicarán con arreglo a la ley general de la materia, sirviendo de base los registros abiertos para ese fin; y en aquellas provincias donde esta formalidad no se hubiese llenado y resultase viciosa, se abrirá un registro durante ocho días consecutivos.

Art. 7º — La publicación del registro cívico en las elecciones de diputados para la Convención nacional durará ocho días.

Art. 8º — El escrutinio de las actas electorales para la elección de convencionales se hará a los quince días de practicada la elección.

Art. 9º — El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer los gastos que exija el cumplimiento de esta ley.

Art. 10. — Comuníquese, etc.

—Se levantó la sesión a las tres de la tarde.